

para buscar medios económicos a fin de ofrecer un mejor acceso a sus instalaciones mediante la colocación de dispositivos como rampas y barandillas.

A medida que los representantes de los servicios se iban familiarizando los unos con los otros y se iban creando buenas relaciones entre el personal de la ayuda comunitaria y la persona con discapacidad y sus familiares, se hacía evidente que las evaluaciones no trataban las necesidades “de por vida”, sino sólo su necesidad de ayuda provisional (que solía cambiar una vez que la familia se había establecido en su propia casa). Las familias no sabían qué había a su disposición ni qué podían pedir y a veces dudaban a la hora de solicitar cualquier cosa. Para solucionar este problema, un coordinador de ayuda comunitaria se reúne con la familia antes de la evaluación de las necesidades y les habla sobre lo que les podría ayudar en su nuevo entorno, a la vez que les hace sugerencias basadas en lo que hay a su disposición, como una silla de ruedas, ayuda a domicilio, asistencia de un cuidador, financiación para adquirir un vehículo especial o para adaptarlo si ya se posee. La discusión gira en torno a en qué medida se les puede ayudar más en un contexto comunitario que en unas instalaciones segregadas. La CCS Disability Action también financia actualmente a personal a tiempo completo para ayudar a los refugiados con discapacidad que llegan a Nueva Zelanda.

Varios nuevos retos surgen de esta área de trabajo relativamente nueva para CCS Disability Action, especialmente en lo que respecta a ofrecer ayuda a familias que han sufrido experiencias vitales que los neozelandeses no pueden ni imaginarse. Una prioridad inmediata es efectuar cambios en la educación proporcionada a los niños y a los jóvenes refugiados con discapacidad, puesto que los datos demuestran que tienen muchas más posibilidades de que se les envíe a colegios especiales que a los niños y jóvenes discapacitados no refugiados.

Recomendaciones para una ayuda efectiva:

- Involucrar al personal de ayuda comunitaria (o trabajadores sociales) que hayan tenido experiencias vitales similares en la provisión de servicios.
- Establecer contacto con la familia de la persona con discapacidad antes de realizar cualquier evaluación de sus necesidades.
- Establecer y mantener una comunicación plena entre todas las agencias implicadas.
- Contar siempre con un intérprete que pueda comunicarse de manera eficaz con los proveedores de servicios y la familia.
- No asumir que todo el personal tendrá conocimientos sobre ayuda efectiva para personas con discapacidad.

- Evitar involucrar a demasiados profesionales (el reasentamiento ya es suficientemente estresante).
- Las agencias de financiación estatales deberían contratar de manera independiente a organizaciones de ayuda a personas con discapacidad para que trabajen en conjunto con los centros de reasentamiento.
- El entorno de los centros de reasentamiento debería ser accesible para las personas con discapacidad, las familias con niños pequeños y las personas mayores

Dado que los proveedores de servicios y el Gobierno neozelandés pueden aprender de las diferentes comunidades de refugiados que se han reasentado en Nueva Zelanda, este país es capaz de enriquecerse de la diversidad y compartir a cambio algunos ejemplos de buenas prácticas con otros países.

Celia Brandon (celia.brandon@refugeeservices.org.nz) es trabajadora social senior en Refugee Services (<http://www.refugeeservices.org.nz>). Candy Smith (candy.smith@ccsdisabilityaction.org.nz) es jefa de equipo de CCS Disability Action (<http://www.ccsdisabilityaction.org.nz>).

1. Taikura Trust es la agencia de evaluación de necesidades que trabaja en nombre del Ministerio de Sanidad.

La decepción de los refugiados con discapacidad en Londres

Neil Amas y Jacob Lagnado

Pequeñas organizaciones comunitarias lideradas por refugiados han estado aguantando sobremanera la tarea de asistir a los solicitantes de asilo y refugiados con discapacidad de Londres.

Mary es una refugiada de Zimbabue de 26 años que vive en Londres, mide menos de un metro y medio de estatura y camina con dificultad como resultado de un crecimiento deficitario debido a una afección que provoca que sus huesos sean quebradizos y tiendan a fracturarse. Cada vez que se rompe un hueso importante pasa meses en el hospital. Es por ello que le aterran las escaleras y otras barreras similares.

Y por eso sorprende tanto que cuando pidió asilo por primera vez en el Reino Unido, los servicios gubernamentales de apoyo al solicitante de asilo le alojaron en la segunda planta de un edificio sin ascensor, ni ningún tipo de ayuda adicional para su condición.

A medida que cuenta su historia se van revelando una letanía de trabas a una ayuda adecuada. Para superarlas ha fortalecido su propio espíritu y determinación, además de contar con la ayuda práctica y emocional que le brinda un grupo local de mujeres de Zimbabue, a las que considera “tías” para ella y para su hijo. Se apresura a destacar que algunos doctores y trabajadores sociales -a título individual- han hecho más de lo que se les pedía para ayudarla, pero son casos excepcionales en un sistema mayor de salud y asistencia social para los solicitantes de asilo y refugiados con discapacidad que le está fallando. Todo apunta a que su caso está lejos de ser atípico entre otras personas en su misma situación.

Existe una carencia importante en el apoyo a este sector de la población, agravada por la complejidad de las leyes que rigen los derechos que conciernen al asilo y la discapacidad; por las necesidades específicas de los refugiados; y por una provisión inapropiada por parte de quienes tienen el deber de atenderles. Curiosamente, parece que los refugiados y solicitantes de asilo con discapacidad confían en amigos, familiares y organizaciones de comunidades de refugiados antes que en la amplia red de los principales organismos de ayuda a personas con discapacidad, tanto oficiales como de voluntarios, de Londres.

A lo largo del estudio se hizo evidente una importante falta de datos oficiales, lo que confirma que se trata de un sector de la población “oculto”. Tanto los organismos gubernamentales locales,

como los centrales con los que hablamos no disponen de registros certeros de cuántos solicitantes de asilo y refugiados tienen alguna discapacidad. Los organismos de voluntariado, pertenecientes a grandes organizaciones benéficas de ayuda a los refugiados y a pequeñas organizaciones de comunidades, o no llevan la cuenta de sus refugiados con discapacidad o emplean métodos de recuento muy variables. Las organizaciones benéficas más grandes parecen tener poco contacto con refugiados y solicitantes de asilo con discapacidad, a menudo no saben si sus clientes son refugiados o solicitantes de asilo o ninguna, y tampoco les explican claramente sus derechos. Es por ello que la mayoría de este sector de población acude a las organizaciones de comunidades de refugiados para solicitar ayuda, donde pueden encontrar asistencia en su propia lengua y culturalmente apropiada.

Desde una angosta habitación, Rizgar dirige una organización de ayuda a personas de origen kurdo con discapacidad a la que no le falta trabajo. Rodeado por pilas de papeles, con muebles desgastados y un ordenador viejo, Rizgar trabaja aparentemente las veinticuatro horas del día, y casi siempre sólo, para ofrecer una admirable y amplia gama de servicios de ayuda, desde rellenar impresos para cuidados a domicilio, representación jurídica para solicitar prestaciones, hasta servicios de interpretación. Estos servicios se ofrecen con un presupuesto mínimo y con la ayuda de voluntarios que desempeñan una función aislada pero decisiva. La situación de Rizgar es típica entre las organizaciones de comunidades de refugiados con discapacidad con las que hablamos.

Estos grupos ofrecen, algo menos tangible aunque no menos importante, la oportunidad de conocer a otras personas de raíces culturales similares y comprometidas a ayudarse mutuamente, por ejemplo en el cuidado de los niños. Pero las organizaciones de comunidades de refugiados se ven impedidas por sus recursos limitados y lo tienen difícil para mantenerse al día de la legislación aplicable.

La confusión acerca de los derechos constituye una barrera al acceso a los servicios a todos los niveles y las leyes de apoyo al solicitante de asilo son un área complicada. Existe un duro contraste entre las experiencias de los solicitantes de asilo y los refugiados que buscan ayuda en los proveedores de servicios oficiales. Aunque las opiniones de los refugiados eran principalmente positivas, los solicitantes de asilo experimentaron grandes dificultades debido a la complejidad de la ley sobre

sus derechos; a la confusión y la falta de conocimiento sobre sus derechos entre los trabajadores sociales; a la lucha por la custodia de los solicitantes de asilo con necesidad de cuidados y, según se informa, a la desgana intencionada por parte de algunos departamentos de servicios sociales para asumir responsabilidades.

Una cuestión decisiva que influye en el apoyo institucional recibido por los solicitantes de asilo y refugiados con discapacidad es su estatus migratorio. En los servicios sociales, como en muchas otras áreas, el estatus migratorio parece determinar la calidad del apoyo recibido. A pesar del deber legal de valorar a las personas con discapacidad independientemente de su estatus migratorio y de proporcionarles los cuidados adecuados, parece que a veces a los solicitantes de asilo se les deniega este apoyo. Además, da la sensación de que la ley se aplica de manera inconsistente e inapropiada, con las agencias estatales intentando descargar responsabilidades las unas sobre las otras y con la confusión sobre los derechos. El proceso mismo de solicitud de asilo provocó problemas adicionales a los solicitantes y refugiados con discapacidad, como la falta de intérpretes para sordos durante las entrevistas de solicitud de asilo.

El idioma es también una de las principales barreras para acceder a la ayuda general. Aunque esto afecta frecuentemente a refugiados y solicitantes de asilo, su impacto sobre aquellos que padecen alguna discapacidad es desmesurado debido a su probable necesidad de buenas redes de apoyo, especialmente si se encuentran lejos de sus familiares y amigos, y por tanto agrava la situación de aislamiento que una discapacidad puede causar.

Existe claramente un vacío importante en cuanto a la ayuda entre el sector especializado en los refugiados y el sector que se encarga principalmente de las personas con discapacidad. Aunque las organizaciones de comunidades de refugiados desempeñan una labor crucial, los recursos ya no dan más de sí y se están quedando cortas a la hora de satisfacer íntegramente las necesidades de esta población. La mayoría de las principales organizaciones tampoco están consiguiendo cubrir estas necesidades, ya que a los particulares no se les está teniendo en cuenta, bien porque están confusos sobre su elegibilidad o porque se les considera inaccesibles. Los solicitantes de asilo y refugiados con discapacidad se están quedando descolgados en términos de ayuda en general. Los principales proveedores haciendo pocos

esfuerzos por alcanzarles y la tendencia actual de la financiación que amenaza con debilitar más a las organizaciones de comunidades de refugiados, este vacío probablemente aumente.

Debido a una serie de factores interrelacionados, parece que las organizaciones de comunidades de refugiados se caracterizan por su precariedad organizativa. Uno de esos factores es el ambiente de competición por la financiación, en el que las organizaciones de comunidades de refugiados pequeñas no sólo están en desventaja con respecto a las más grandes que están mejor equipadas para pujar por contratos de servicios, sino también en competición directa con muchas otras organizaciones de comunidades de refugiados. Otro factor es la escasez de personal profesional competente en la recaudación de fondos, información, promoción de acciones políticas, y comprensión de los sistemas y estructuras de los sectores de voluntariado del Reino Unido, con frecuencia agravado por las dificultades lingüísticas. Es probable que esta marginación continúe, por lo que el ambiente político -cada vez más restrictivo- y las exclusiones de las prestaciones y recursos seguirán motivando a las organizaciones de comunidades de refugiados a ofrecer una muy necesaria red de seguridad. El informe recomienda a todas las organizaciones -estatales o de voluntarios- así como a las de comunidades de refugiados, que mejoren sus datos sobre el número de solicitantes de asilo y refugiados con discapacidad y la naturaleza de la misma. Y, al mismo tiempo, que las principales organizaciones de personas con discapacidad, los servicios de salud y de cuidados sociales busquen, de manera activa, oportunidades de trabajo conjuntas con las organizaciones de comunidades de refugiados y viceversa.

Neil Amas (neil.amas.1@city.ac.uk) y Jacob Lagnado (jacob.lagnado.1@city.ac.uk) son, respectivamente, director y delegado de información e investigación en el Centro de Información sobre Asilo Político y Refugiados (ICAR) (<http://www.icar.org.uk/>)

El presente artículo está basado en un estudio realizado por el Centro de Información sobre Asilo Político y Refugiados (ICAR) encargado por la fundación Metropolitan Support Trust, que quería entender exactamente qué tipo de ayuda estaban recibiendo los refugiados y solicitantes de asilo con discapacidad y de dónde provenía.

Informe completo disponible en: <http://tinyurl.com/ICAR-London>